



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

**Proceso:** ORDINARIO LABORAL  
**Radicado:** 05001-31-05-022-2017-00732-02 (O2-23-351)  
**Demandante:** JOSÉ IVÁN VÉLEZ CORRALES  
**Demandadas:** COLPENSIONES E.I.C.E., PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A.  
**Procedencia:** JUZGADO VEINTIDÓS LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN  
**Asunto:** LIQUIDACIÓN DE COSTAS

En Medellín, a los catorce (14) días del mes de octubre del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como magistrado sustanciador, procede a dictar decisión de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por JOSÉ IVÁN VÉLEZ CORRALES en contra de COLPENSIONES E.I.C.E., PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A. conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-022-2017-00732-02 (O2-23-351), a fin de resolver el recurso de apelación impetrado por la parte actora, en contra de la decisión adoptada el 16 de junio de 2023, y mediante la cual el juzgador de instancia aprobó la liquidación de costas y agencias en derecho.

1. ANTECEDENTES

El señor JOSÉ IVÁN VÉLEZ CORRALES, actuando por intermedio de gestor judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de la AFP PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES E.I.C.E., a fin de que se declarara la nulidad o ineficacia del traslado de RPMPD al RAIS, la reactivación de su afiliación a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la devolución de los aportes efectuados a la AFP, junto con el reconocimiento de la pensión de vejez y los intereses de mora previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; controversia que se dirimió en primera instancia por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, el 23 de septiembre de 2019 (docs.42 y 43 carp.01), el que declaró la ineficacia del traslado del demandante del RPMPD al RAIS, ordenando a COLPENSIONES aceptar el regreso o vinculación, y condenó a PROTECCIÓN S.A., trasladar todos los valores de la cuenta de ahorro individual del actor, incluyendo aportes, rendimientos, intereses y frutos; a la vez de gravar en costas

a las administradoras PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A. en la suma de un (1) SMLMV para cada una, a favor del demandante; sentencia que fue adicionada por esta Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, el 14 de febrero de 2020 (docs.49 y 50, carp.01), condenando a la AFP PORVENIR S.A. en costas en esta instancia.

### 1.1. Trámite de Primera Instancia

El Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, en fecha 16 de junio de 2023 (doc.15, carp.01) emitió el auto de cúmplase lo dispuesto por el superior funcional, y dispuso que por la secretaría del despacho se liquidaran las costas del proceso, las cuales se liquidaron por valor de \$ 3.197.803 por concepto de agencias en derecho, discriminadas de la siguiente manera: \$ 1.160.000 a cargo de la AFP PROTECCIÓN y a favor del señor JOSÉ IVÁN VÉLEZ CORRALES por concepto de agencias en derecho por la primera instancia y \$ 2.037.803 por las agencias en derecho de primera y segunda instancia a cargo de la AFP PORVENIR S.A.; liquidación sobre la que se impartió aprobación en la misma fecha.

### 1.2. Recurso de Apelación

Inconforme de la decisión antes descrita, la apoderada judicial de la parte demandante (doc.54, carp.01), interpuso los recursos de reposición, y en subsidio apelación, solicitando se modifique el valor de la costas tasadas en primera instancia, como quiera que a su juicio *“...lo reconocido por su Despacho por concepto de costas procesales en primera instancia en favor de mi poderdante, es decir, \$1.160.000 a cargo de PROTECCIÓN S.A. y \$2.048.603 [( \$ 2.037.803 por agencias en derecho + \$ 10.800 por otros gastos) = \$ 2.048.603] a cargo de PORVENIR S.A., no guarda armonía con los límites máximos concebidos en la norma en mención, las instancias procesales que tuvo que surtir, el tiempo de duración del proceso que data del año 2017 y mucho menos con la labor desempeñada por la suscrita abogada a lo largo de toda la Litis, criterios estos que deben ser valorados a la hora de fijar las agencias en derecho”*; agregando que asistió a todas las audiencias programadas por el a quo y realizó todas las actuaciones necesarias y requeridas.

### 1.3. Trámite de Segunda Instancia

El recurso de apelación fue admitido por ésta corporación el 24 de octubre hog año (doc.02, carp.02), y se corrió traslado a las partes en el mismo proveído para que, de

conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, presentaran alegatos de conclusión por escrito, de estimarlo del caso; oportunidad en la cual la poderhabiente de la AFP PROTECCIÓN S.A. solicitó se confirmara la decisión impugnada, por cuanto la liquidación de costas se encuentra conforme con lo establecido en el acuerdo PSAA16-10554 de 2016; a más de que se tuvieron en cuenta “...los principios de comprobación, utilidad, legalidad y razonabilidad, que prescribe la Corte Constitucional, teniendo en cuenta las circunstancias que rodearon el litigio, y la gestión de la apoderada de esta entidad, en relación con el proceso” (doc.04, carp.02).

## **2. ANÁLISIS DE LA SALA**

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el extremo litigioso por activa, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio del auto impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada.

### **2.1. Problema Jurídico**

El punto neural de debate en la presente Litis se contrae a determinar si la liquidación de las agencias en derecho causadas en el trámite de la primera instancia del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por JOSÉ IVÁN VÉLEZ CORRALES en contra de la AFP PROTECCIÓN S.A., AFP PORVENIR S.A. y COLPENSIONES E.I.C.E., se ajusta a la normativa que regula la materia.

### **2.2. Tesis de la Sala**

La Sala confirmará la decisión de primer grado, con el argumento central de que la tasación de las agencias en derecho, se ajusta a los parámetros fijados por el Consejo Superior de la Judicatura, y el monto es equitativo, razonable, prudente y proporcional, respecto de la naturaleza, calidad y la duración de la gestión desplegada.

### **2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado**

Siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia nacional esta Corporación relieves que las costas, esto es, la erogación económica que corresponde efectuar a la parte que resulte vencida en un proceso judicial, está conformada por dos rubros distintos: las expensas y las agencias en derecho. Las primeras corresponden a los gastos surgidos con ocasión

del proceso y necesarios para su desarrollo, descritos genéricamente en el numeral 3° del artículo 366 CGP como todos los demás gastos hechos por la parte beneficiada con la condena. Por otra parte, las agencias en derecho tienen por finalidad la compensación por los gastos de apoderamiento en que incurrió la parte vencedora, aunque pueden fijarse sin que necesariamente hubiere mediado la intervención directa de un profesional del derecho (CC sentencia C-089 de 2002).

De conformidad con lo indicado en el artículo 365 del CGP, las costas procesales, comprensiva de las expensas y las agencias en derecho, se imponen a cargo de la parte vencida, a la que se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto, y a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza.

Las costas son objeto de liquidación por el tribunal o juzgado de la respectiva instancia o recurso, aplicando las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura para la fijación de las agencias en derecho y teniendo en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión profesional desplegada, así como la cuantía de las condenas, sin exceder el tope máximo de dichas tarifas, como se previno en el artículo 366 CGP.

Para los anteriores efectos el Consejo Superior de la Judicatura dispuso la emisión del **Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016**, aplicable al caso objeto de análisis, y en relación con el asunto que nos ocupa fijó las siguientes tarifas de agencias en derecho para el área laboral:

*“ARTICULO 5°. TARIFAS. Las tarifas de agencias en derecho son:*

- |                             |                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>En única instancia</i>   | <i>a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre el 5% y el 15% de lo pedido.</i>                    |
|                             | <i>b. En aquellos autos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 smlmv.</i>                                  |
| <i>En primera instancia</i> | <i>a. Por cuantía: Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario</i>                                           |
|                             | <i>(i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido</i>                                                                         |
|                             | <i>(ii) De mayor cuantía; entre el 3% y el 7,5% de lo pedido.</i>                                                                      |
|                             | <i>b. Por la naturaleza del asunto: En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 smlmv.</i> |
| <i>En segunda instancia</i> | <i>Entre 1 y 6 smlmv”.</i>                                                                                                             |

Adicionalmente, conviene resaltar que de conformidad con lo indicado en el numeral 1º del artículo 365 del CGP, la condena en costas no procede por un obrar temerario, de mala fe, o doloso de la parte condenada, sino que es el resultado de ser vencida en el proceso, es decir, su imposición se hace de forma objetiva atendiendo la prosperidad de las pretensiones y/o las excepciones; en tanto que su liquidación, por el contrario, corresponde a criterios ponderativos relacionados con la naturaleza, calidad, duración de la gestión ejecutada por el mandatario judicial, la cuantía de las pretensiones, y demás circunstancias relevantes, dentro de un concepto claro de razonabilidad y proporcionalidad.

En ese norte, vale apuntar que las normas señaladas establecen criterios de carácter cualitativo y cuantitativo para que el juzgador fije tales agencias, sin que se pueda imponer de manera automática el valor de dicha importe, pues simplemente orientan al juez para que éste, haciendo un ejercicio discrecional ponderativo, fije un monto que considere equitativo, razonable, prudente y proporcional con el valor de la condena o la absolución impartida, justipreciando la duración y calidad de la gestión profesional realizada en el transcurso del proceso, teniendo en cuenta los límites máximo y mínimo fijados por la ley, pero sin que ello signifique que el fallador esté forzado a fijar como agencias el máximo referenciado.

En síntesis y de acuerdo con lo delineado por la Corte Suprema de Justicia en decisión STC3869 de 2020, la fijación de las agencias en derecho debe seguir los lineamientos que a continuación se enuncian: “... (i) *deben motivarse y determinarse en la respectiva actuación que las genere; (ii) una vez en firme, el secretario del despacho de única o primera instancia, las incluirá en la liquidación de las costas; y de ese trabajo, (iii) el juez o magistrado hará un control de legalidad mediante auto susceptible de reposición y de apelación según corresponda, con el fin de verificar si las aprueba, modifica o dispone su reliquidación*”.

Revisado el expediente, la Sala advierte que la demanda se radicó el 17 de noviembre de 2017<sup>1</sup>; se admitió el día 17 de enero de 2018 (doc.05, carp.01), se notificó a COLPENSIONES E.I.C.E. y a las codemandadas AFP PORVENIR S.A. y AFP PROTECCIÓN S.A. el 31 de enero, 04 de abril y 26 de junio de 2018, respectivamente (docs.06, 14 y 25, carp.01); se dirimió en primera instancia el 23 de septiembre de 2019 (docs.42 y 43, carp.01); la actuación desplegada por la apoderada judicial de la parte actora consistió en la presentación de la demanda (doc.02, carp.01), la comparecencia a

---

<sup>1</sup> Conforme con la información consultada en el sitio web: <https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/Index>

la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación el litigio, decreto de pruebas, trámite y juzgamiento (docs.39 a 42, carp.01).

Adicionalmente, se encuentra acreditado que el proceso de la referencia es de naturaleza ordinaria, y de complejidad baja, por razón de los reiterados pronunciamientos emitidos por la jurisprudencia laboral del máximo órgano jurisdiccional, frente a la procedencia de las pretensiones incoadas; así mismo, obra constancia de que la primera instancia se surtió en 606 días, esto es, 1 año, 8 meses y 6 días.

Así las cosas, la Sala considera que el monto fijado para las costas de la primera instancia, esto es, la suma un salario mínimo legal mensual a cargo de cada una de las codemandadas, esto es, las sociedades AFP PORVENIR S.A. y AFP PROTECCIÓN S.A., corresponde a un ejercicio ponderativo equitativo, razonable, prudente y proporcional, a juzgar por la naturaleza, calidad y la duración útil de la gestión desplegada, a sabiendas de que los límites mínimo y máximo autorizados, ondean entre 1 y 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el 2019, fecha de la sentencia, vale decir, la suma de \$ 828.116 pues el proceso fue de baja complejidad, y su duración no fue prolongada.

Por lo visto, se muestra una diferencia en la suma cuantificada por el juzgador de instancia, al calcular las agencias en derecho en la suma de \$ 1.160.000, esto es, el SMLMV para esta anualidad; sin embargo, el valor de las agencias en derecho fijadas por el juzgador de primer nivel no será objeto de ajuste por esta Corporación en detrimento de los intereses del gestor, bajo el entendido de que *“...la concreción del principio de la non reformatio in pejus consiste en impedir que en segunda instancia el juez agrave, empeore o desmejore la situación que fue definida en primer grado al apelante único o a la parte beneficiaria de la consulta. En consecuencia, el superior debe dejar y mantener incólumes aquellos aspectos del fallo impugnado o consultado que le benefician a la parte que se vea favorecida por esta garantía<sup>2</sup>”*; por manera que no queda otra vía para la Sala que confirmar la decisión confutada, al no ser controvertida por la parte accionada, la suma en que fueran tasadas las agencias en derecho.

### 3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en el **artículo 365 del CGP**, no se impondrán costas procesales en esta instancia, por no haberse causado, en la medida de su no comprobación.

---

2 CSJ SL1704 de 2021, CSJ SL3693 de 2021 y CSJ SL690 de 2023.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**, Sala Quinta de Decisión Laboral,

**4. RESUELVE**

**PRIMERO:** CONFIRMAR la liquidación de costas aprobada el 16 de junio de 2023 por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por JOSÉ IVÁN VÉLEZ CORRALES en contra de COLPENSIONES E.I.C.E., la AFP PROTECCIÓN S.A. y la AFP PORVENIR S.A., según y conforme la parte considerativa de este proveído.

**SEGUNDO:** SIN COSTAS en esta instancia.

Lo resuelto se notifica **POR ESTADOS**, en los términos previstos en el artículo 41 literal c) del estatuto instrumental laboral.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

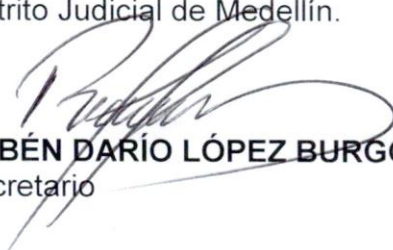
  
**VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**  
Magistrado Ponente

  
**CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES**  
Magistrado

  
**SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE**  
Magistrada

**CONSTANCIA SECRETARIAL**

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.

  
**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario

**LA SECRETARIA DE LA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL  
SUPERIOR DE MEDELLÍN CERTIFICA:**

Que esta providencia fue notificada en los **ESTADOS n.º 195** fijados en  
la secretaría del Tribunal, hoy 15 de noviembre de **2023** a las 08:00am,  
los cuales pueden ser consultados en  
"Publicación de Estados Electrónicos SL-TSM"

**RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS**  
Secretario